

Nuevos elementos sobre el diagnóstico de la violencia en Colombia

El rechazo a la guerra y la búsqueda de alternativas para el logro de la paz han sido objeto de múltiples manifestaciones recientes por parte de la sociedad civil. La más significativa de todas ellas ha sido, sin lugar a dudas, la reciente consulta popular a favor del Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad. Esta propuesta surgida de la unión de Redepaz, País Libre y la Unicef, hace parte de un proceso de búsqueda de alternativas para el logro de la Paz, como reacción a la generalización de los problemas de violencia en el país. Como aporte a este propósito nacional, Coyuntura Social ha querido dedicar este número a la presentación de estudios que ofrecen nuevos elementos para el análisis de esta problemática. En todos ellos se formulan algunas reflexiones que ofrecen nuevas opciones para encausar la acción del Estado en este campo.

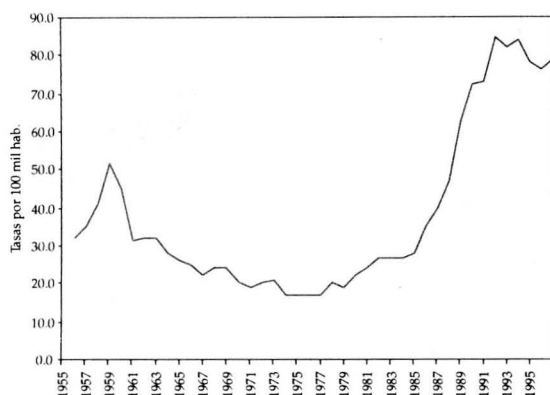
Estos trabajos complementan el artículo de Losada y Vélez¹, publicado en el primer número de esta revista, en el cual se presenta por primera

vez una serie histórica desde 1955 sobre la frecuencia relativa de los homicidios en Colombia. Con base en esta información, así como con los certificados de defunción entre 1979 y 1986 procesados por el Dane, Losada y Vélez cuestionaron la asociación tradicional de la violencia homicida y los denominados "factores estructurales", tales como la muy desigual distribución de tierra, capital e ingresos. Dado que estos factores no registraron cambios notables entre 1958 y 1988, es limitada su capacidad para explicar el notable descenso de la tasa de homicidio entre 1958 y 1973 y su posterior ascenso hasta los años noventa (Gráfico 1).

Este tipo de enfoque contrasta con la visión tradicional de la problemática de la violencia en Colombia. De hecho, se ha generalizado la percepción de la criminalidad como un fenómeno predominantemente urbano, sin relación con el conflicto político caracterizado por la acción de los grupos alzados en armas. Por ello, la violencia se ha interpretado como

¹ Losada Rodrigo y Vélez Eduardo (1989) "Tendencias de muertes violentas". Coyuntura Social. Fedesarrollo No. 1. Diciembre. Págs 121 y 123.

Cuadro 1
TASA DE HOMICIDIO EN COLOMBIA



Fuente: Losada, Rodrigo y Eduardo Vélez, (1989), Policía Nacional 1990-1996.

expresión de la intolerancia y los problemas de convivencia, cuyo origen se encuentra, entre otras causas, en las condiciones de exclusión, pobreza y desigualdad, así como en la debilidad del Estado.

La información sobre defunciones del Dane, permitió a Losada y Vélez (1989) clasificar municipios y departamentos según la frecuencia relativa de la ocurrencia de homicidios. Su estudio encontró diversidad de determinantes de la violencia y complejidad de sus interacciones. Asimismo, estableció el carácter eminentemente rural de las zonas más violentas y la presencia en ellas de al menos un grupo armado, sea guerrilla, autodefensa, narcotraficantes o sicarios a sueldo. De manera complementaria, el análisis sobre criminalidad realizado en la edición de esta Revista de mayo de 1991 sugería que el

crecimiento de los homicidios y su intensidad en ciertos meses del año podía explicarse como resultado de la acción deliberada de algunos grupos bien equipados y entrenados y decididos a matar. Podrían ser grupos de paramilitares o de sicarios².

Por supuesto, estos elementos no coinciden con los diagnósticos de una violencia esencialmente urbana y débilmente asociada a las causas políticas. Por ello, es de gran utilidad el proceso reciente de reflexión de carácter interdisciplinario. En este conjunto de trabajos se ha aportado nueva evidencia sobre el carácter no accidental de la violencia, su incidencia predominantemente rural y el efecto de los grupos organizados en su generalización. Así mismo, este tipo de estudios ha analizado información que contradice la tradicional asociación entre pobreza y violencia, a través del examen de los indicadores de pobreza de las zonas más violentas. También han resaltado el alto grado de intimidación y la ausencia de una política punitiva que disuada a los criminales³.

El artículo de Mauricio Rubio que se publica en este número, sugiere un replanteamiento del diagnóstico de la violencia, sustentado en la evidencia reciente aportada por la recopilación de las causales de los homicidios, realizada por Medicina Legal. Estas estadísticas, sumadas a los datos de la Policía Nacional para los 1.053 municipios del país durante el período 1990-1995, así como a las cifras judiciales de investigaciones preliminares de delitos contra la vida y

² Coyuntura Social No 4. Mayo 1991. Pags. 29 y 30.

³ Programa de Estudios sobre Seguridad, Justicia y Violencia de la Universidad de los Andes. Paz Pública No. 1 y 2. Julio y octubre de 1997.

la seguridad de las personas para 1994 y 1995, le permiten al autor llegar a varias conclusiones. Por un lado, el grueso de la violencia colombiana se concentra en pocos lugares del país. Más aún, los municipios más violentos no son las grandes ciudades. En segundo término, los municipios con mayores índices de violencia presentan condiciones de pobreza menos desfavorables que los del resto del país. En tercer lugar, los municipios con mayor incidencia en homicidios inician sumarios por delitos contra la vida en menor proporción que los menos violentos, hecho que revela un alto grado de intimidación de los ciudadanos cuando la violencia se generaliza. Finalmente, se aporta evidencia sobre la coincidencia de diversos actores armados, como la guerrilla, el narcotráfico, los paramilitares y agentes individuales, en los municipios con mayores índices de homicidios. Se sugiere como hipótesis que la violencia ejercida por estos actores organizados, al expandirse, se interrelaciona y refuerza con otras manifestaciones de violencia de los ciudadanos⁴.

Por su parte, el trabajo de Camilo Echandía presenta nueva evidencia sobre la dimensión regional del homicidio en Colombia. En particular, se presenta información cartográfica que permite identificar las regiones más afectadas por la violencia. Se concluye que no se trata de un fenómeno de las ciudades, pues entre 1990 y 1995 el 93% de los municipios con índices críti-

cos de homicidios son rurales. Más exactamente, los municipios con tasas de homicidios superiores al promedio nacional, son aquellos donde priman el campesinado medio cafetero y la colonización de frontera. En el primer tipo el 72% de los municipios registran tasas de homicidios superiores al promedio nacional y en el segundo el 56%. Por su parte, la principal causa reconocida en las zonas más violentas, es el ajuste de cuentas, revelando el carácter intencional del homicidio, en contraposición con las tesis de violencia accidental. Al igual que en el trabajo de Mauricio Rubio, Echandía proporciona evidencia sobre la alta correspondencia geográfica de los municipios más violentos con aquellos donde hay una fuerte presencia de los actores organizados⁵.

La evidencia recogida en estos documentos es consistente con la nueva literatura internacional sobre la materia. De hecho, recientemente se ha registrado un creciente interés por entender las causas y consecuencias del crimen y de la violencia. Por ejemplo, un estudio de Fajnzylber, Lederman y Loayza (1997)⁶ utiliza información para más de 100 países durante el período 1970-1994 con el fin de analizar las relaciones entre criminalidad y condiciones económicas, las políticas disuasivas del estado y los factores culturales y de capital social.

Los autores confirman la existencia de una relación inversa entre el ingreso per-cápita de

⁴ Rubio Mauricio, "De las riñas a la guerra: hacia una reformulación del diagnóstico de la violencia colombiana", publicado en este mismo número.

⁵ Echandia Camilo "Dimensión Regional del Homicidio en Colombia", publicado en este mismo número.

⁶ Versión presentada en el Seminario de Latin American and Caribbean Economic Association LACEA, celebrado en Bogotá entre el 1 y el 3 de octubre de 1997.

cada país y la tasa de homicidios correspondiente. En segundo término, encuentran una relación positiva entre criminalidad y desigualdad en el ingreso, particularmente fuerte cuando el pobre está en una posición relativamente más desventajosa con el resto de la sociedad. Así mismo, identifican que a mayores tasas de castigo, menor la incidencia del crimen.

Un examen rápido de estos hallazgos sugiere posibilidades de acción del estado, principalmente mediante la aplicación de una política económica y social integral, que logre un crecimiento dinámico, con alta creación de empleos y remuneraciones adecuadas, que permita reducir la pobreza y prevenga la concentración de la propiedad. El papel de la educación como herramienta para prevenir la generalización de la violencia es otro de los mecanismos que requieren de mayor análisis para aportar al diseño de políticas preventivas. En la medida en que la elevación del nivel de escolaridad de la población es una de las recomendaciones para los próximos años, será necesario estudiar sus posibles efectos sobre el fenómeno de la violencia en el caso colombiano.

Así mismo, un campo importante de acción de las autoridades es el diseño de una política

punitiva eficaz. Esta de ninguna manera puede ser el resultado de factores coyunturales de hacinamiento carcelario, como las recientemente aducidas por el gobierno para justificar el proyecto de ley que busca reducir las penas. La capacidad del sistema judicial de afectar la actitud frente al delito es fundamental para reducir los índices de criminalidad. Es también muy importante lograr la resocialización de delincuentes, sin sacrificar la severidad de las penas frente a los infractores de la ley.

La complejidad del problema de violencia que vive el país y la poca eficacia en estrategias de solución dan gran relevancia a los nuevos elementos del diagnóstico que se recogen en esta revista. La localización marcadamente rural de la violencia -frente a la caracterización urbana-, así como la intencionalidad -frente a su pretendido carácter accidental-, son aspectos que no pueden pasar inadvertidos. Además, el papel de los grupos organizados en su generalización, la intimidación que paraliza la denuncia y las implicaciones internacionales del fenómeno, son aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar propuestas que permitan encontrar una solución a este problema que genera las mayores pérdidas humanas, sociales y económicas para el país.

Bibliografía

- Fajnzylber, Pablo, Daniel Lederman and Norman Loayza. (1997), "What causes crime and violence ?" Mimeo. Office of the Chief Economist, Latin American and The Caribbean, The World Bank, Washington D.C.
- Guerrero Rodrigo MD. Dr PH. (1997), "Prevención de la Violencia a través del control de sus factores de riesgo" Organización Panamericana de la Salud. Washington.
- Levine, Felice and Katherine J Rosich. (1996), "Social Causes of Violence: Crafting a science agenda". American Sociological Association.
- Losada Rodrigo y Vélez Eduardo (1989), "Tendencias de muertes violentas". Coyuntura Social. Fedesarrollo No. 1. Diciembre.
- Rubio Mauricio (1996), "Homicidios, Justicia, Mafias y Capital Social -Otro Ensayo sobre la Violencia Colombiana-". Documento CEDE 96-6. Agosto.
- Rubio Mauricio (1997), "La Justicia en una Sociedad Violenta. Los agentes armados y la justicia penal en Colombia". Documento CEDE 97-03, Septiembre.
- Universidad de los Andes. Paz Pública. (1997), Programa de Estudios sobre Seguridad, Justicia y Violencia. Carta No. 1 y 2. Santafe de Bogotá. Julio y octubre.